

Imprimir

“El problema es con César Gaviria como persona, él representa el neoliberalismo, representa más de lo mismo. El país necesita un cambio, bienvenido el partido Liberal y aquí está.”

Francia Márquez, presentación como candidata vicepresidencial.

“Mientras yo sea presidente del partido Liberal doy por terminadas las conversaciones que planeaba tener con ese sector político. Siento mucho que el Pacto Histórico piense que su lenguaje incendiario es algo que podamos celebrar los colombianos. César Gaviria, responde a Francia Márquez.

Una semana después de realizadas las consultas por las tres coaliciones que quieren la presidencia para sí, el Centro Nacional de Consultoría, CNC, contratado por la revista de los Gilinski, rindió el resultado de su encuesta. Gustavo Petro mantiene el primer lugar con 32% de intención de voto, Federico Gutiérrez está segundo en el partidador, con 23%. En la carrera final, Sergio Fajardo y Rodolfo Hernández aparecen empatados con un 10%.

Entonces los que marcan la delantera no había escogido vicepresidente@. De los tres contados el 13 de marzo, el primer en anunciarlo fue Sergio Fajardo, acompañándose del exministro de medio ambiente, Luis Gilberto Murillo, dos veces gobernador del Chocó, en 1997 y 2012. Este miércoles el Pacto Histórico rompió el hielo. Su cónclave anunció, no las bases, que Francia Márquez es la candidata a vicepresidente. La decisión, en buena parte, aparecía adelantada por el resultado en la consulta, cuando consiguió 785.215 votos, llevándose por delante al líder de la tercera plataforma electoral en la contienda del 29 de mayo.

El anuncio realizado por Francia en la aceptación de la nominación disgustó al máximo jerarca del Liberalismo, César Gaviria, quien no siguió en las conversaciones con el PH. En uno de los debates de Semana y El Tiempo, ella no había tenido empacho alguno, al decir:

“Un pacto con Gaviria significa más de lo mismo. Gaviria es parte de lo que ha llevado a este país a vivir en la crisis que estamos viviendo, en la hambruna, en la corrupción; siempre ha estado gobernando para su favor.” (ET, 24/03/22, p. 1.3).

En el entretanto, Gaviria se viene reuniendo con Federico Gutiérrez, y anuncia nueva reunión para estos días. Petro reaccionó en un tuit, para indicar que no quería “descalificar personas, cuando sé que Colombia necesita el camino de las rectificaciones...Esperamos que el liberalismo se apreste al camino de las reformas que necesita Colombia.”

En materia de hechos, hay dos notorios. El liberalismo aumentó su votación en la elección para Congreso, pero fue derrotado por la plataforma del Pacto Histórico; pero, con los resultados obtenidos tiene el segundo número de senadores y de representantes para lo que serán las batallas derivadas del paquete de reformas y contrarreformas que arrancarán en los primeros 100 días del nuevo gobierno.

El otro tiene que ver con quién define, por estatutos, a qué candidato apoyar. El artículo 28 y siguientes señalan que no lo puede hacer ni el presidente del partido, tampoco los congresistas elegidos, sino las bases que son la máxima autoridad. Tendría que convocarse una convención que el atesorador de avales no estará dispuesto a hacer. Más aún, cuando parte de los liberales ya se mueven con la candidatura reformista de Petro, quien ayer mismo alertó que el liberalismo no puede terminar apoyando el fascismo.

El CICR responsabiliza al gobierno

“Hay que decirlo sin ambigüedades y con valentía: son los grupos narcotraficantes del Eln, las disidencias de las Farc y el ‘clan del golfo’, quienes afectan a nuestra población, bajo su interés de lucrarse con las economías ilícitas.” Jefferson Mena, Alto Consejero de DH.

“La reconfiguración de los actores armados no estatales y el incremento de las confrontaciones armadas, del control social y la disputa territorial aumentaron la presión sobre la población civil y plantearon nuevos desafíos para la asistencia humanitaria.” Informe de la CICR, ET, 24/03/22, p. 1.5.

El miércoles se presentó el informe oficial, *Retos Humanitarios del 2022*, del CICR en Colombia, cuyo jefe, Lorenzo Caraffi alertó que “se incrementó el número de comunidades confinadas y desplazadas por causa del miedo y del incumplimiento del DIH y otras normas

humanitarias por parte de los actores armados.” En cifras, el Chocó tiene el mayor número de confinamientos, tiene el 78.5 de casos, y hay 35.409 víctimas de las presiones y acciones de grupos ilegales durante el año 2021. El total de víctimas en el mismo año fueron 45.108, y 7.932 desplazados más para evitar nuevos ataques.

El siguiente departamento afectado por la violencia durante el posconflicto es Nariño que reportó 22.738 desplazados y 2.706 confinadas. En materia de desplazamientos los siguen Cauca con 7.667, y Antioquia con 6.874. En el balance del CICR se recuerdan las cifras de años anteriores: en 2019 fueron 25.303 en todo el país, en el 2020, 21.307, mientras que en el siguiente año fueron 52.880 víctima, duplicando el desplazamiento. Mientras que el confinamiento casi se duplicó con respecto al año 2020, 28.120, mientras que fue de 45.108 el año pasado.

El informe que comentamos avanza en una caracterización del tiempo del posconflicto colombianos, a dos meses de la elección presidencial en su primera vuelta. El CICR indica que hay seis conflictos armados principales, y que estos alcanzaron, según las estadísticas conocidas, los niveles mayores en el último quinquenio.

A la fecha persisten el conflicto entre el Estado y el Eln, las disidencias de las Farc y las AGG, la organización que dirigía Otoniel. También siguen los enfrentamientos con la Nueva Marquetalia, y las disidencias contra el Comando de la Frontera (Ejército Bolivariano de Venezuela). Como si fuera poco, la asistencia humanitaria, en particular, la Mesa nacional de la Misión Médica registró 553 agresiones contra personal, instalaciones y vehículos.

Por último, la misión del CICR recordó a todos los actores armados, y, de modo especial, a la Fuerza Pública, “la obligación estricta de respetar el DIH”, acompañada de la urgente protección debida por el gobierno a la población civil en las zonas de conflicto, y el cuidado y preservación de la infraestructura pública y privada objeto de estos repetidos ataques.

De cara al informe, el gobierno Duque niega que haya seis conflictos armados en Colombia, según lo señaló el Informe de la CICR. Para concluir que “no es vinculante para el Estado.” Y

el Consejero del gobierno contrasta el crecimiento advertido de las cifras, recordando que en el periodo corrido entre 2015-2018 hubo 670.778 víctimas. Guarismo que probaría con el accionar del gobierno que ya está de salida ha logrado disminuciones ostensibles.

Al revisar este apartado, queda clara la doble realidad de Colombia que, nos recuerda, en qué medida el compromiso de la paz con legalidad hace aguas de modo irremediable, por una parte. De otro lado, el gobierno niega la validez de los hechos, y, en el menos peor de los casos, propone otro tipo de cálculo, en lugar de centrar la atención en tres de los cuatros años transcurridos en la presidencia del Centro Democrático que corona el bloque de la guerra social.

El segundo elemento de esta realidad prepresidencial nos muestra cómo la mayoría ciudadana, la multitud subalterna, que se expresó a través del voto el 13 de marzo, ha probado su rechazo a través del Pacto Histórico, todavía no suficiente, de los partidos que han estado siendo parte de *la política pública de guerra*, esto es, Centro Democrático, y sus aliados, Conservadores, Cambio Radical, Partido de la U, y la Coalición Mira-Colombia Justa Libres.

Es la política que, prácticamente, se extiende desde el hundimiento de las negociaciones de paz, 1999-2002, cuando el presidente Pastrana, señaló 72 horas, para dar comienzo a las operaciones militares contra la contraparte en la negociación, ordenando el despeje de los 5 municipios que tenía como cabeza a San Vicente del Caguán.

El gazapo de Duque y Vega en sordina expresidencial

Quizá una de las medidas que debía tomar la Comisión de Garantías Electorales sea la de proponer un registrador ad hoc que acompañe a quien está en ejercicio.”: Pedro Medellín, Asunto de Confianza, ET, 24/03/22, p. 1.13.

“Exigimos garantías. Es urgente que en los escrutinios hagan presencia las autoridades...para velar por un conteo de votos transparente.” Germán Córdoba, director de Cambio Radical.

“Después del recuento tenemos que reconocer y aceptar los resultados, sean favorables o adversos.” Ernesto Macías, CD. El senador de la “jugadita.

“Para dar seguridad de que este proceso fue limpio, hay que pedir un recuento y examinar uno a uno los formularios para que no quede ninguna duda...” Omar Yepes, presidente del directorio Conservador, en ET, 12/03/22, p. 1.2.

Al probarse la validez de la reclamación hecha por el Pacto Histórico, PH, cuando el dirigente principal alertó sobre un posible fraude. Ésta, primero, bajo la conducción de Roy Barreras se tradujo en una revisión de los formularios E-14, con la aparición de 390.000 votos no contabilizados.

Con esta rectificación se perdieron curules previamente adjudicadas a otras listas. La algarabía creció, y el jefe “natural” de Centro Democrático, el Innombrable reclamó que hubiera un conteo de todas las mesas, ante los resultados comprobados en favor del PH. Y cómo si hubiera duda, el presidente elegido por el CD, quien anunció que votaría las coaliciones, después de cantar su voto reclamó también revisar los conteos para dizque restaurar la “fe pública”. Esa demanda, el Registrador la acompañó de inmediato, convocando a la Comisión nacional de Garantías Electorales.

Después de toda la escandola, reunida la Comisión de Garantías, salió humo blanco. La conclusión fue bien sencilla, el Registrador no solicita recuento de todas las mesas. Y la Comisión se pliega al decir de Alexander Vega, a quien se ha revisado el modo cómo llegó a convertirse la principal autoridad electoral, luego de haber pasado la prueba por las más altas instancias judiciales del país, y haber presentado antes, un examen mediocre.

En el bolate de cuestionar *in totto* las elecciones, la parte del león la dirigen los gacetilleros de la prensa mainstream alienada con los poderes, al triunfador indiscutido, con todo y fallas, el Pacto Histórico. Acontecimiento en la historia de las elecciones colombianas, porque la vez que se estuvo más cerca, cuando ganaba Anapo, se cerró la comunicación pública, y al día siguiente el triunfador fue el Frente nacional, y con él, se reinstauró el fraude en las

postrimerías del pacto excluyente bipartidista, cuya fórmula consociacional se agrietó.

Una muestra para no olvidarla, la dio el comunicador Juan Lozano, en su columna: Recuento ya... Frustrado ahora en su designio. Pero, antes, llamó la atención con respecto al software comprado, no por el Pacto Histórico, para la Registraduría. Aquí está la perla exhibida por este “periodista” al borde de un ataque de nervios, “Y falta lo más complejo y delicado (sí, esto apenas empieza), y es que aún la polémica Indra no ha salido a bailar con su nuevo software. Ojo. ¿Ya lo probarían?...” Y Juanito, quien empezó a hacer política como universitario con Luis Carlos Galán y el Nuevo Liberalismo, cerró así su exigencia de recuento total:

“Tan peligroso es un fraude electoral como la idea generalizada de que ese fraude existió. Colombia requiere certezas, transparencia y claridad.” (ET, 21/03/22, p. 1.11)

Al fin de cuentas, en la reunión de la Comisión de Garantías solo tres partidos estuvieron de acuerdo en realizar el conteo general: Centro Democrático, Salvación Nacional y Oxígeno Verde, de la candidata Ingrid Betacourt, que a lo largo de la campaña ha estado dando mandobles contra la corrupción.

Vega empezó de modo concluyente: No existe fraude en Colombia. Enseguida cada uno de los 21 partidos representados definió su posición con respecto al recuento. Entre ellos los siete partidos que conforman el Pacto Histórico. De estos, Gabriel Becerra, de la UP, señaló: “los llamados que se han hecho, desde el presidente de la República rompen con la neutralidad (...) Si hay dudas, lo que procede es que se respete lo previsto en la Constitución y la ley.” (ET, 23/03/22, p. 1,.2)

Después de oírlos a todos, Vega reuló diciendo: “La decisión que ayer planteé era para presentarla hoy. No he presentado ninguna, quiero aclarar eso, y se hizo con el propósito de buscar una salida. Para tranquilidad de las fuerzas políticas, no voy a presentar la solicitud de recuento de votos.”. (ET, 23/03/22, 1.2)

Al decirlo, el bisoño e intempestivo Registrador había sido ilustrado por el exregistrador

Alfonso Portela, quien había dicho que la competencia para el recuento de votos “no existe y no hay ninguna entidad investida para poder ordenar un recuento total de votos, desconociendo la competencia de las comisiones escrutadoras.”

Así terminó este amago de golpe de opinión, que recordó las travesuras del ex senador Álvaro Uribe. Claro, quienes quieran insistir en las quejas electorales, podrán hacerlo ante las respectivas comisiones escrutadoras, como lo recordó la politóloga Mónica Pachón, estudiosa del asunto. En el caso de las elecciones al Congreso, la demanda de nulidad se puede presentar dentro de 30 días hábiles, una vez declarada la elección objeto de la demanda.

La prueba del pudín clientelista

Antes hubo una verificación de los resultados obtenidos para el senado por el Conservatismo, cómo crecieron, y la posible causa, la mermelada distribuida por la pareja conservadora Duque/Correa. La que denuncia Daniel Coronell en su columna de este jueves leída en la radio W, revisando los auxilios repartidos, para la prosperidad. Los que sí no funcionaron en la reconstrucción de Providencia, como se ha señalado tantas veces.

La mayor votación conservador fue por Nadia Georgette Blell, 165.000 en el Departamento de Bolívar. Es la hermana del gobernador Blell. El segundo senador, Carlos Andrés Trujillo, 160.000, conservador de Itaguí, quien obtuvo 10.000 votos en Uribía, un pueblo liberal, en la capital indígena de Colombia, que mutó en favor del conservatismo.[1]

En este y otros casos, la mano bendecida es Susana Correa y el maná del departamento de Bienestar Social hacen milagros en la tierra. Así se benefició también Marco Daniel García, el que era alcalde de Montería, con 150.000 votos que lo hacen senador con todos los honores. Es el hijo de la conservadora Nohora García, una respetable clientela del Córdoba, la tierra del Ubérrimo.

La proeza de la maquinaria en cabeza de Susana Correa alcanzó también para Viviana Esther Beetar Castilla, oriunda de Cereté. Es la prima del candidato conservador David Barguil. Una verdadera revelación que tiene atónita a la propia Paloma Valencia, porque la debutante la

dobló en su debut. Recibió 114.000 con el “generoso” concurso de los electores, mientras que la beligerante y “moralista” Paloma no le alcanzó su envidia sino para contabilizar 60.000 sufragios, con los cuales contribuir a la sepultura con honores de su fermentido “centro democrático”.

La lista rastreada por Coronell, un liberal que probablemente crea en el gran arquitecto del universo, en todo caso tiene los ojos puestos en la tierra, no solamente la costeña. Porque la cruzada clientelista conservadora se extendió para beneficiar a Oscar Quiroga, exgobernador del Tolima, la tierra que antes dominaba el tribuno liberal Alberto Santofimio que dio con sus huesos en la cárcel, a raíz de su asociación non sancta con la mafia del cartel de Medellín.

Pero, la jefe de esta cruzada clientelar, Susana Correa, cuyos regalos hacen sonrojar a Aída Merlano y el clan de los Char, - en disfrute de las escasas mieles de la recuperación de la economía venezolana y los melosos coqueteos de Joe Biden - por lo pronto descansa en el Ingenio Mayaguez, y se prepara para ocupar el premio recibido, un ministerio, por los favores hechos a su partido y a la democracia colombiana.

Claro que la amiga de Iván, David y Omar, así contribuyó a preparar la deseada derrota del “demonio” Gustavo Petro, porque quiere hacer rentable las tierras ociosas, y garantizar la pensión a todos los jubilados que tengan entre 1 y 4 salarios mínimos. Dándole un revolcón a Colpensiones y al coto de caza de Asofondos que con Santiago Montenegro,[2] y sus consejeros trata de aterrorizar, sin bombas, con fake news la discusión en torno a los pilares sobre los cuales montar la reforma pensional.

El economista y analista de política pública, al frente de la Escuela Superior de Administración Pública, la ESAP, que buscaba calificar y llenar de probidad la burocracia del Estado y el gobierno colombiano, tiene a la vista el caso de Susana Correa, y, claro, del Registrador. Como Catón reclama no la remoción del registrador, sino uno ad hoc que lo acompañe, y restaure la confianza de Colombia. Cuando “los líderes de la izquierda y la derecha ya han anunciado su disposición a no reconocer los resultados electorales, en caso de que no los favorezcan. Ya no estamos ante disputas contables.” (Ver ET, op. Cit, 1.13)



Antes Medellín, en su columna hizo un repaso de la teoría política con respecto a las condiciones para que unas elecciones en las democracias liberales, si lo fuera la colombiana, sean competitivas. Las condiciones que reproduce el comentarista son tres, pero yo cito la 3) que confíen en el escrutador. Si no hay confianza en el escrutador, las elecciones no serán competitivas. Y si no lo fueran se afecta uno de los dos componentes de la pareja teorizada por Weber en su sociología política: la *dominación legítima*, es decir, la elección perderá la legitimidad". De ese modo, aparecerá desnuda la dominación, y el gobernante aparecerá "empeloto", como en el celebrado drama shakespereano.

Un joven historiador, Juan Esteban Constaín, con algo de consternación, en su columna que recuerda el sarcasmo de Cervantes y su Quijote, en Barataria, recuerda la Violencia: "Casi tres décadas de un conflicto atroz y vesánico durante la primera mitad del siglo XX que hizo de nuestro país un vestigio y un reflejo de su propio siglo XIX." Para sacar la siguiente conclusión:

"no sobre recordar en estos días agotadores y turbios que corren, que esa guerra civil no declarada empezó por la cuestión electoral. Fue justo allí, en ese territorio tan delicado y frágil de la democracia, donde el país se fue al carajo." (ET, 24703/22, p.1.13)

La ecuación a resolver en elección presidencial

"no hay garantías cuando el registrador solo habla de errores humanos; no basta el recuento si él no se separa del cargo..." Carlos Felipe Mejía, senador del CD.

Visto lo anterior, no hay duda que la elección presidencial de Colombia tendrá al binomio paz/guerra como uno de los elementos imprescindibles a considerar en la ecuación del triunfo. El segundo componente es la urgencia de la reforma social y económica que tiene dos componentes notables. Un elemento notable es el "estallido social" en las ciudades más golpeadas por la desigualdad, el triángulo Cali, Bogotá y Medellín. El otro es el publicitado asunto de las pensiones que tanta prensa y radio han mojado, con la utilización de fake news para señalar al candidato puntero de "expropiador y guerrillero".

Establecida la verdad electoral, en el primero de tres rounds pactados, si no se decide la elección en la primera vuelta, siguen los debates entre candidatos, de los cuales se marginó ya Gustavo Petro, exigiendo de sus contrincantes que se dejen a un lado los argumentos ad hominem, y se garantice el debate sobre los asuntos programáticos.

Por lo pronto, Ingrid, Federico, Sergio y Enrique Gómez salieron quemados cuando levantaron la vocería de exigir un recuento general de votos, en lo cual volvieron a perder. A la vez que dieron prueba supina de su ignorancia de las leyes electorales vigentes, al lado nada más y nada menos que el Registrador, el Presidente de la República, y el titeretero mayor del partido de la guerra, especialista vencido esta vez en golpes de opinión, y en espera de si será o no condenado por sus actuaciones presuntamente criminales.

La audaz Ingrid Betancourt, quien consiguió la libertad a la operación de las FFAA, que disfrazaron un avión con las enseñas de la CICR para engañar a los secuestradores, de lo que jamás ha hablado en sus peroratas sobre corrupción en Colombia, en la reunión tronó diciendo: “Exijo una respuesta clara sobre el medio millón de votos que aparecieron del cubilete para el Pacto Histórico”.

Estos fueron los comentarios hechos en el Gran Debate de RCN y los medios que hacen parte del oligopolio mediático que tiene a la familia Ardila Lulle al frente. Con el atril de Gustavo Petro vacío. Nadie recordó las repetidas ausencias del dos veces presidente de Colombia, y mucho menos las exigencias del candidato puntero, según las encuestas y los votos contabilizados por las tres plataformas.

Así empiezan a descontarse los algo más de 60 días que desembocarán en las urnas. El Pacto Histórico, como otros cuatro agrupamientos en la contienda tiene una representante afro-colombiana en la fórmula vicepresidencial. Corresponde, en los hechos, al 10 % de la población colombiana registrada como miembro de esta minoría, y que suma algo más de 4,5 millones de votos.

Pero, lo más relevante está en que la fórmula del Pacto Histórica junta dos componentes de

la cultura política nacional: la que cree en la representación vía elecciones, y la que le da relevancia principal a la protesta, a los plantones, las manifestaciones y cuya fuerza se descubrió en los recorridos vividos entre los años 2018 y 2021, y antes en el periodo que se inició en 2010, con las movilizaciones estudiantiles, reclamando reformas urgentes a la educación pública que siguen sin satisfacerse.

Este doble precipitado es lo que permite hipotetizar, para su prueba, que en Colombia está también ganando momento una experiencia singular de revolución democrática muchas veces interrumpida en el siglo XX, y lo corrido del siglo XX. El rastro en la historia moderna se puede ubicar en 1928/29, con la masacre de las bananeras que cerró brutalmente un ciclo de activismo obrero con aliados subalternos circunstanciales, y que no logró cooptar y transformar in toto, la llamada revolución liberal de Alfonso López.

Sin duda que, lo dicho claramente por Francia Márquez, sobre la revisión crítica del liberalismo y sus elites recuerda y actualiza las críticas hechas en primera persona por Gaitán, antes de aceptar los honores institucionales con que lo premiara el establecimiento liberal de los años cuarenta. Ahora, el Pacto Histórico tiene que completar la tarea, sin dejarse confundir por los cantos de sirena de César Gaviria y el establecimiento liberal. La apelación a sus bases es el verdadero nombre del juego.

El pulso por el favor de los subalternos se irá resolviendo en los siguientes días, sin miedo y esperanza, con un real programa de reformas, que, para nada ha de descartar, un proceso constituyente democrático social. Pero todo tiene su tiempo.

---

[1] Antes había llenado de elogios en la Comisión 6, a la ministra de Transporte.

[2] Afiliado, como tantos otros, cómo no, a Colpensiones, aunque se desparraman en bondades de la afiliación a los Fondos Privados. Contra toda evidencia de los réditos recibidos por quienes fueron embaucados con un sinnúmero de promesas a comienzos de los años 90, cuando estaba la cruzada de desmantelamiento del ISS.



Colombia subalterna, ni miedo, ni esperanza Un binomio emblemático: Gustavo y Francia

Miguel Ángel Herrera Zgaib, PhD, Director Grupo Presidencialismo y Participación, Minciencias/Unijus, Presidente del International Gramsci Society, IGS-Colombia.

Foto tomada de: AS Colombia